

Para publicación inmediata

12 de julio de 2024

Barcelona amenaza con eliminar el pionero modelo de los clubes sociales de cannabis

El Ayuntamiento persigue el cierre de estos espacios, ejemplares en el mundo, en un momento crítico para la regulación internacional

Barcelona — La ciudad de Barcelona se encuentra en un punto crítico con respecto a la supervivencia de sus clubes sociales de cannabis (CSC), un modelo exitoso que se está replicando en otros países. En los últimos días, alrededor de treinta asociaciones han recibido notificaciones remitidas por el Ayuntamiento, con propuestas de sanción que oscilan entre multas económicas y el cese temporal de actividad, el cual abarca periodos de seis meses a dos años. Esta situación refleja una estrategia persecutoria del consistorio barcelonés, que parece dirigirse hacia el cierre total de estos espacios de reducción de riesgos en la ciudad.

En enero, ICEERS presentó una [carta al Ayuntamiento](#) respaldada por 179 expertos y representantes de instituciones de más de 53 países, defendiendo el modelo de los CSC de Barcelona, pionera en la creación de este tipo de espacios de consumo compartido. A pesar del contundente y representativo apoyo internacional y de la petición formal de reunión, no se produjo respuesta ni apertura al diálogo por parte del Ayuntamiento, que ahora ha intensificado su persecución administrativa, sin la transparencia ni el rigor que habrían de esperarse por parte de las administraciones públicas.

Esta coyuntura coincide, paradójicamente, con la apertura del primer club social de cannabis con plenas garantías legales en Alemania. Simultáneamente, en Barcelona se emiten órdenes de clausura, evidenciando un retroceso significativo en las políticas de drogas locales, alineadas con enfoques prohibicionistas que el propio partido gobernante rechazaba hace tan sólo unos años.

Factores estructurales

El contexto actual presenta una combinación de factores estructurales y circunstanciales que complican aún más la situación de los clubes cannábicos en Barcelona. A pesar de que existen más de doscientas asociaciones de este tipo en la ciudad, el tejido activista se ha visto desmembrado debido a años de represión policial y judicial, la ausencia de apoyo por parte de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y la irrupción de actores con intereses comerciales. Esta situación se ha agravado con la llegada de líderes políticos como Albert Batlle, cuya carrera se ha

caracterizado por una visión conservadora y prohibicionista.

Mientras tanto, el modelo de Barcelona ha servido de inspiración en otras partes del mundo, donde se valora su enfoque en la reducción de daños y el autocultivo regulado. En países como Uruguay, Sudáfrica, Malta y Alemania, estos espacios ya operan bajo marcos legales. Sin embargo, en Barcelona, el movimiento parece retroceder, pues la reciente estrategia municipal amenaza con dismantelar este modelo progresista. Por ello, la comunidad internacional observa con preocupación la actuación del consistorio liderado por el alcalde Jaume Collboni, del Partido Socialista de Catalunya.

ICEERS aboga por políticas de drogas que respeten los derechos de los consumidores y se basen en la evidencia científica. Según su experiencia, esta medida no sólo afectará negativamente a los CSC, sino que también podría aumentar la inseguridad y el mercado no regulado, contraviniendo los principios de salud pública y derechos humanos.

Un ejemplo para el mundo

Òscar Parés, director adjunto de ICEERS, declara: «La actual estrategia del Ayuntamiento de Barcelona no sólo amenaza la existencia de los CSC, sino que también socava más de dos décadas de progreso en la creación de un modelo autorregulado y seguro que ha servido como ejemplo para el mundo. Solicitamos que el consistorio reconsidere su postura y opte por un enfoque más dialogante y basado en la evidencia».

ICEERS hace un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para reconsiderar su postura y abrir un diálogo constructivo que permita el desarrollo de políticas de drogas más justas y efectivas. Por el bien de la salud pública, resulta importante que se reconozca el valor de los CSC y se trabaje en conjunto hacia un futuro donde se respeten los derechos de los consumidores, se establezcan medidas de reparación y equidad social, y las políticas públicas se basen en la [evidencia científica](#), velando así por el bien del conjunto de su ciudadanía.

Los clubes sociales no sólo proporcionan un entorno seguro para el consumo de cannabis, sino que también educan a sus miembros sobre el uso responsable y reducen los riesgos asociados al mercado no regulado. El cierre de estos centros podría llevar a un aumento en el consumo descontrolado, con más riesgos y adulteraciones, y sin supervisión, exacerbando los problemas de salud pública en lugar de mitigarlos. Como ya se ha demostrado, un enfoque colaborativo entre las autoridades y las propias asociaciones puede establecer un modelo sostenible y respetuoso con los derechos humanos que sirva como referencia para otras ciudades.

Contacto:



Òscar Parés

info@iceers.org

Tel. +34 930 430 284